

NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11302-07

REFERENCIA	Modifica la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en relación con el nombramiento, la permanencia y dedicación exclusiva de los cargos de consejeros
INICIATIVA	Moción de la diputada Sra. Turres
ORIGEN	Cámara de Diputados
COMISIÓN	De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
INGRESO	22 de junio de 2017
ARTICULADO	Artículo único, signado como artículo 1°

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Motivada en una reciente designación de un miembro del Consejo de Defensa del Estado, se propone que estas designaciones, actualmente de carácter absolutamente discrecional por parte del Presidente de la República, deban efectuarse con acuerdo del Senado. La proposición va en la dirección correcta y se encuentra en línea con otras designaciones de organismos públicos relevantes, como el Consejo del Banco Central, el Tribunal Constitucional (con un procedimiento más complejo) o el Sistema de Alta Dirección Pública ■■■

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Se limita a 10 años la duración del cargo de consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con una sola renovación por igual período.

El Presidente de la República requerirá acuerdo del Senado para nombrar a los consejeros.

Se hace incompatible la función de consejero del CDE con el ejercicio de la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios ante cualquier tribunal (esta incompatibilidad actualmente afecta solo al Presidente del Consejo) ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

Nacido como Consejo de Defensa Fiscal, el actual Consejo de Defensa del Estado debe asumir la defensa del fisco (según expresa su ley orgánica) en todos los juicios y actos no contenciosos de cualquier naturaleza que sea, así como los intereses del Estado respecto de los juicios que afecten bienes nacionales de uso público. Si bien en sus comienzos tenía facultades para intervenir en cuestiones de carácter patrimonial, su competencia se fue abriendo a toda clase de asuntos, incluyendo acciones penales, incluso en materia tributaria, previa denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos.

Los miembros del Consejo son doce, incluyendo el presidente; son nombrados por el Presidente de la República sin sujeción a escalafón, y con

la facultad de nombrar abogados extraños al Consejo; además cuenta con procuradores y delegados para cubrir todo el territorio nacional. Cuenta con un secretario-abogado.

La ley regula la forma de adoptar acuerdos y establece el quórum requerido según la naturaleza del asunto.

El sueldo de cada consejero es de aproximadamente \$7.600.000 brutos. Son inamovibles, excepto por causas legales y duran en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. Solo el Presidente del Consejo tiene prohibición de ejercicio liberal de la profesión de abogado. Su sueldo es ligeramente mayor que el de los demás consejeros ■■■

V. COMENTARIOS A LA PROPUESTA LEGISLATIVA

La moción en sus fundamentos alude indirectamente a una designación efectuada recientemente por la Presidente de la República; pero como se observa en el proyecto de ley, la única norma que tiene por objeto limitar la facultad discrecional del Presidente, es exigir el acuerdo previo del Senado para proceder al nombramiento. Sin embargo, no precisa la forma de recabarse ese acuerdo, ni con qué quórum (por lo que debe concluirse que se trata de la mitad más uno de los presentes en la respectiva sesión), ni qué sucede si el Senado rechazare la proposición presidencial.

Podrían haberse propuesto algunas normas básicas sobre estos puntos, como un plazo para la presentación al Senado del candidato (por ejemplo, tres meses antes de producida la vacante por cumplimiento de la edad del consejero que se va); o la facultad del Presidente de proponer otro nombre si se hubiere rechazado el anterior, lo que podría entenderse implícito en la norma propuesta, pero tratándose de nombramientos relevantes, como son todos los que incluyen la participación del Senado, se debería regular con mayor precisión. Como también sucede en otros organismos, podría reservarse la designación del Presidente del Consejo a la decisión del Presidente de la República.

Respecto de la prohibición de ejercicio profesional en causas privadas ajenas al

Consejo, es una recomendación atendible, pero que debe examinarse en función, entre otros, de nivel remuneratorio similar. Los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que también tienen dedicación exclusiva, tienen niveles remuneratorios algo mayores que los del CDE, pues sobrepasan levemente los nueve millones de pesos. Ello, sin embargo, no podría considerarse una limitación absoluta para establecer la dedicación exclusiva en el Consejo. Es, con todo, una cuestión discrecional o de prudencia política, sobre lo cual no cabe una sola postura.

Finalmente, en lo estrictamente formal, no parece adecuado derogar el artículo 19 de la ley orgánica del Consejo, que establece la limitación de ejercicio privado para el Presidente; parece preferible incluir allí la norma propuesta para limitar, para todos los miembros, la atención de asuntos particulares.

Al mismo tiempo, parece necesario realizar una evaluación más global del Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de analizar si actualmente se justifica una institucionalidad en los términos actuales, o bien si sería conveniente reevaluar la manera en que está concebido, ya sea para modernizar su estructura y revisar sus competencias o bien discutir sobre la pertinencia de un servicio público como este ■■■

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establézcase las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado:

1. Reemplácese el artículo 12¹ por el siguiente:

“El Consejo se compondrá de doce abogados, quienes ejercerán sus funciones durante diez años, pudiendo ser renovados solamente por un nuevo período. Cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera y lo establecido en la presente Ley. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Con todo, cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad.

Serán nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.

Los Consejeros no se encuentran sujetos a las normas de escalafón de la Administración Pública.”

2. Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Artículo 12 bis.- Será incompatible con las funciones de consejero el ejercicio de la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios que se sigan ante cualquier tribunal.”

3. Deróguese el artículo 19²..



1 Artículo 12 vigente:

Art. 12º.- El Consejo se compondrá de doce abogados, quienes serán inamovibles en sus cargos y cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad.

Serán nombrados por el Presidente de la República, sin sujeción a normas sobre escalafón, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas al Consejo.

2 Artículo 19, que se deroga:

Art. 19º.- Prohibese al Presidente del Consejo de Defensa del Estado ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios que se sigan ante cualquier tribunal.